

La última revolución rusa

Luces y sombras de las reformas económicas en Rusia

MIGUEL CARPINTERO

Críticas por el aumento de la pobreza

La historia de la Unión Soviética, desde su principio hasta su fin, ha puesto a prueba los aspectos más básicos de la organización de nuestra sociedad occidental. Al terminarse abruptamente ese ensayo político en 1991, resultó evidente que el ceder tantas libertades en sociedad no había servido para alcanzar niveles más altos de bienestar. En este artículo analizaremos con especial interés el caso ruso. A pesar de que notables pensadores se adelantaron a decretar el fin de la historia o el

triunfo sin paliativos de un modelo racionalmente universal, la transformación de las sociedades ex comunistas está siendo un proceso muy ingrato, lleno de obstáculos y dificultades. Los economistas más ortodoxos, que confiaban ante todo en el mercado y en una limitada intervención del Estado, en base al principio de subsidiariedad, aplicaron, en un gran número de estos países, un conjunto de políticas liberalizadoras de la economía conocidas como terapia de choque. La secretaría americana del tesoro e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, apoyaron decididamente estas

medidas. Las penurias y sacrificios realizados han llevado a muchos autores a considerar que se precipitaron las reformas hacia el libre mercado a costa de los grupos sociales más débiles. Mucho choque y muy poca terapia, se ha dicho. Sin duda la autocrítica es la característica más loable de nuestra sociedad occidental. Estos a quienes podríamos considerar como institucionalistas, abogaban por una transición gradual, con mayor preparación institucional de la sociedad civil para una economía de mercado.

Por fortuna o desgracia, tal debate no ha sido metodológico sino que hunde sus raíces en cuestiones más bien intangibles que exceden de lo económico y guardan estrecha relación con el difícil diseño de escenarios alternativos. De este modo, se imputan a las medidas económicas adoptadas cambios y consecuencias de muy diverso índole y origen complejo. El abandono de la economía planificada supuso las mayores caídas de producción y consumo registradas nunca en tiempos de paz. Con el fin del régimen soviético, Rusia sufrió un descenso del 50% en su producto interior bruto. Las desigualdades en la distribución de la renta aumentaron (se duplicó el índice de Gini) y un 40% de la población pasó a vivir por debajo de la línea de pobreza (rentas por debajo de la mitad del salario mínimo). Descendió la natalidad y la esperanza de vida, aumentó la criminalidad, la incidencia de enfermedades infecciosas y el descontento. Una mayoría de rusos afirma en las encuestas recientes estar en peor situación que antes de comenzar las reformas.

El argumento del poder monopolístico

El plan de privatizaciones masivas realizadas por el Gobierno Yeltsin-Gaidar entre 1992 y 1994 mereció graves críticas. En aquel período, el 75% de las pequeñas empresas y el 80% de los trabajadores pasaron al sector

privado. Las empresas de mayor tamaño fueron privatizadas en gran medida mediante la libre distribución de vales (en inglés, *vouchers*) que podían ser canjeados por un pequeño negocio, el pago de la vivienda o por acciones en oferta pública, afectando así a un total de 15.000 empresas, que representaban en torno a un 60% de los activos industriales. A finales de 1992, se distribuyeron 150 millones de vales (de 10.000 rublos cada uno) y en 1994 el programa de vales había alcanzado al 99% de la población.

Ha habido un importante desacuerdo acerca de que se antepusiese la privatización a la creación de un ambiente competitivo. Ello se basaba en el general prejuicio de que la industria rusa estaba formada por grandes cárteles, y más tarde se reforzó por la aparición de importantes mafias y poderosos oligarcas, que mediante la corrupción y la intimidación violenta impedirían que el libre mercado diera sus frutos, comprometiendo la democracia y el futuro del país. Sin embargo, es preciso difundir el estudio publicado en 1989 por Brown, Ickes y Ryterman que refutaba el extendido cliché de una economía rusa constituida por gigantes monopolios industriales. Es cierto que los planificadores soviéticos combinaban una exagerada fe en las economías de escala y además preferían concentrar la producción en pocas unidades para poder ejercer un control más eficaz. Sin embargo, la industria soviética se desgranaba en ramas hasta tal punto que dos tornillos diferentes se consideraban dos productos distintos, de modo que en realidad sus productores podían fácilmente ampliar la gama de su producción a bajo coste y entrar en competencia. Por otro lado, estadísticas en mano, resultó que las 100 empresas más grandes rusas, en términos de empleados, no disfrutaban de posición dominante en la producción de sus bienes.

En marzo de 1991 el comité para la política antimonopolística comenzó sus actividades y

tenía 641 firmas en su registro de monopolios. En 1994 el gobierno abandonaba la política de control de precios a favor de una política de apoyo a la competencia y el comité sólo mantenía un control sobre monopolios naturales. Es decir, la actividad de este comité fue rápidamente en declive: aquí no estaba el problema ruso.

La corrupción en la transición

Rusia recibe ocho veces menos inversión directa extranjera de lo que le correspondería por tamaño y oportunidades de negocio. La corrupción y la falta de seguridad jurídica entrañan riesgos demasiado altos para los capitales extranjeros. Es cierto que existen poderosos oligarcas económicos, influyentes en política y vinculados a la mafia. Aunque no son intocables; como demuestran las investigaciones por delitos fiscales iniciadas por Putin en el año 2000 o el caso de Vladimir Gusinski, magnate de las comunicaciones, cuya extradición denegó la Audiencia Nacional española en 2001.

La dispersión de la propiedad en pequeñas cuotas durante la privatización permitió un gran número de abusos. La inversión extranjera fue excluida de este proceso aumentando de este modo su opacidad. Los títulos no indizados a la inflación, que en 1992 era del 2500%, fueron fácilmente concentrados. Los oligarcas además se aseguraban de restringir fraudulentamente el acceso a la subasta de las acciones de las empresas que les interesaban. De una manera u otra, Jeffrey Sachs, profesor de Harvard, y uno de los principales diseñadores de la terapia de choque rusa, acabó reconociendo en 1999 que el programa de vales desembocó en una corrupta caza de rentas, en el saqueo de empresas y en la parálisis de muchas de ellas. Demasiado a menudo los tenedores de aquellos vales acabaron con las manos vacías. Puede que nunca haya sido más cierta la

afirmación de Balzac de que “detrás de toda gran fortuna, hay un crimen.” Las presiones populistas sacaron este programa adelante, con el voto de comunistas, demócratas radicales y miembros de la nomenclatura. Entonces se quedó en minoría el equipo Gaidar, que advertía que la búsqueda de la justicia universal en el programa de privatizaciones podía desviar a éste de su objetivo principal: generar un nuevo clima económico, con los incentivos correctos para los agentes, de manera que favoreciese la inversión, el crecimiento a largo plazo y la eficacia a niveles microeconómicos. Hungría y Macedonia han sido de los pocos países ex comunistas que se han negado a usar el popular programa de vales, de relativa sencillez logística. El tiempo les dio la razón. Resultó funesto confundir propiedad con riqueza; como si la propiedad no llevase aparejadas cargas (fiscales, depreciación, gestión, inversiones, etc.), y fuese necesario hacer partícipe a todo el mundo de propiedad para así hacerles llegar riqueza. La concentración de la propiedad era previsible pero la corrupción que exigió produjo un problema gravísimo: la ocultación de patrimonios, la evasión de capitales y un fraude fiscal crónico. Así se hundió el necesario sistema de redistribución de rentas. Es posible que esté aquí el origen de los más graves problemas de la transición rusa: el aumento de la pobreza, la precariedad de los ingresos públicos, la corrupción de funcionarios mal pagados, la falta de seguridad jurídica, el deterioro de servicios públicos, etc. La reforma fiscal, que es un aspecto clave para extender a todos los beneficios reales del cambio de sistema y la igualdad de oportunidades, fue boicoteada durante años por las grandes rentas y oligarcas. A pesar de que dicha reforma era condición impuesta en todas las ayudas del FMI, sólo se logró sacarla adelante a principios del 2002, cuando el presidente Putin puso su continuidad en juego si no se

aprobaban un número importante de medidas económicas (entre ellas también la subida del precio del gas en Rusia).

“La ventana de las oportunidades”

A pesar que algunos autores achacan a la rapidez con que se privatizó la incertidumbre y corrupción en Rusia, la velocidad en este proceso era necesaria por dos razones fundamentales: una coyuntural y otra teórica.

Las reformas que emprendió Gorbachov, absolutamente graduales en intención, habían llevado a lo que se ha denominado como privatización espontánea. Durante los últimos años de su gobierno intentó emular las reformas económicas chinas. Si bien un régimen dual pudo funcionar en la China de la década de los 70, eminentemente rural y con fuertes tasas de crecimiento, esto no fue así en la compleja y estancada economía industrial rusa de 1989.

En 1990 se reforma la constitución soviética para reconocer el derecho a la propiedad privada y al lucro. Estos años fueron un período dorado para la nomenclatura. Rota la disciplina de partido, los altos cargos de las industrias gozaban de una situación ideal, mientras que los riesgos quedaban a cargo público, la apropiación de beneficios era absolutamente privada. El propio Gaidar consideraba que, de no haber untado el camino hacia la democracia con dólares, la vieja guardia nunca lo hubiese recorrido sin un derramamiento de sangre.

Por un lado, había que hacer frente a esa privatización espontánea que se estaba produciendo de facto. Era preciso encauzarla para que comenzase a ser productiva para la economía del país. Por otra parte, había que invertir la distribución del poder en el país de manera que fuese imposible el retorno al comunismo. El hecho de que muchos grupos de presión no supiesen evaluar la trascendencia de lo que estaba en juego, aunque sí los beneficios

a corto plazo, es lo que permitió sacar adelante un paquete de medidas tan radicales. Después de 1994, las reformas han sido más difíciles de aprobar. La profesora de Georgetown (USA) experta en Rusia, T. Gustafson, considera que en 1992 se produjo una auténtica revolución.

Las virtudes de la propiedad privada

El argumento más teórico a favor de la privatización no es ni siquiera muy popular entre la opinión pública de la Unión Europea. La privatización de grandes empresas, con frecuencia llamadas “joyas de la corona”, suelen despertar sospechas ya que no se entiende bien las ventajas sociales que reporta el pasar a manos privadas un negocio que es rentable para las arcas públicas.

Sin embargo, en un ambiente competitivo, la propiedad privada supone reunir la responsabilidad y el riesgo en la misma persona, aunque sea jurídica, ya que se juega su supervivencia. El mercado proporciona un complejo sistema de controles descentralizados que obliga a la oferta a adecuarse a lo que se demanda y, en última instancia, a la innovación. Además, los inversores vigilan la gestión de sus capitales a través del mercado de crédito y de valores, premiando los rentables y huyendo de las gestiones deficitarias.

En los países ex comunistas resultaba necesario hacer rápidamente un importante número de privatizaciones para así tener un sector privado lo suficientemente grande y rentable como para sostener todo ese tipo de actividades.

Ello ha permitido un uso racional y más eficiente de los factores de producción, pues, por lo general, se consigue producir más y más barato. Se ahorra y así se generan nuevos recursos que reinvertir en la sociedad, generando más actividad y cubriendo las

necesidades públicas. De la mejoría de salud de las empresas, y de toda la economía en general, cabe esperar incrementos en los ingresos del Estado y la mejora de sus servicios.

Estas ganancias en eficiencia requieren deslindar la gestión económica de consideraciones políticas. Menos tangible pero también importante es lo que la propiedad privada significa en términos de libertad personal; como subrayó Hayek, es una esfera más de independencia del individuo frente a la injerencia de los demás.

¿Genera la propiedad privada por sí misma la democracia espontánea y el respeto de todos a las libertades de los demás? Desgraciadamente no, pero resulta un obstáculo infranqueable a quien quiera ejercer el poder de manera absoluta, entendiéndolo que desde la violencia y el terror no se puede gobernar indefinidamente.

Por otro lado, dado que la autarquía en nuestros días es condenarse a vivir por debajo de las posibilidades materiales que ofrece el mundo, la economía de mercado también conduce a la necesidad de alcanzar un concierto internacional, y los sistemas de control descentralizado económico vuelven a reproducirse internacionalmente. Esta integración e interdependencia no carece de problemas y crisis pero supone una distribución de la soberanía de los países, cuyos dirigentes ya no pueden hacer lo que les dé la gana. El liberalismo económico, la economía de mercado, contribuye así, positiva pero limitadamente, al desarrollo de la democracia. En el caso ruso resultó que las mayores amenazas al bienestar general se encontraban en el interior y no en el extranjero.

Limitaciones a la globalización económica para resultar en prosperidad

Es posible presentar algunas evidencias acerca de cómo el liberalismo económico asiste favorablemente a los avances democráticos. El cuadro anexo pone en relación el grado de transformación de una economía (desde el control público al privado) con el desarrollo de las libertades civiles y políticas. Del cuadro se desprenden dos interesantes lecciones. Los países del bloque ex soviético con regímenes no libres también son los que han realizado un menor grado de reformas, y poseen por debajo del 50% del PIB en el sector privado (Bielorrusia, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán y Tadyikistán). Sin embargo, en otros casos, se han dado avances democráticos óptimos junto a limitadas reformas sobre la propiedad; tal ha sido el caso de Eslovenia, Bulgaria o Croacia, que con más del 50% de la economía en manos del Estado han alcanzado altos niveles democráticos.

(aquí va la tabla de la página 97, que no se ha escaneado)

Uno de los factores clave en este resultado ha sido la profunda e intensa influencia que ha ejercido la Unión Europea sobre estos países mediante sus acuerdos (Europa y el acuerdo de estabilización y asociación con Croacia). La adhesión a la Unión Europea, que supera lo meramente económico, es el ancla más sólida que previene que esos países se vayan a la deriva como por años fue Ucrania y como hasta ahora va Bielorrusia. La adhesión a la UE implica un proyecto nacional definido, con un programa y un calendario de reformas de todo orden, desde las medioambientales y administrativas, hasta la resolución de disputas fronterizas o de minorías. Implica también una supervisión supranacional, una dinámica de negociaciones multilaterales, y la formación de funcionarios, elaboración de estadísticas, y “mejores prácticas” a todos los niveles de la

sociedad, empezando por los puramente políticos. Sin embargo, Rusia no contó con esta opción, de ahí que la intensa liberalización económica pueda considerarse una segunda mejor elección.

En realidad este tipo de apoyo internacional es excepcional. Por ahora parece que sólo se da en Europa, y aun aquí tiene importantes limitaciones. La exportación de este modelo de desarrollo democrático y económico no es sencilla; ahí está el fracaso de Mercosur, a pesar de que allí hay sólo dos idiomas distintos en una zona mucho más homogénea que la europea.

Así pues, el liberalismo económico y la frecuentemente denostada globalización económica han hecho posible la impresionante transformación de Rusia. Muchos de los graves perjuicios sociales generados entre 1992 y 1994 deben achacarse no ya a la privatización en sí, sino al procedimiento utilizado, extremadamente populista. En esa transformación se muestra como fundamental un eficaz sistema tributario como medio para la consecución de los objetivos básicos de justicia social, y equidad. Y por encima de todo ello, es el papel modernizador de la comunidad internacional uno de los mayores valores a estimar en el proceso de la Historia.